

Santiago, trece de octubre de dos mil veintidós.

Visto:

En autos RIT O-6886-2019, RUC N° 1940222771-3, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, se acogió la demanda de declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones interpuesta por don José Naun Maluenda Cuevas en contra de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco-Chile), declarando la existencia de un vínculo laboral ininterrumpido entre las partes desde el 1 de enero de 1997 al 25 de julio de 2019, fecha en que el actor fue despedido injustificadamente, condenado a la demandada al pago de una diferencia en la indemnización por años de servicios y feriados, el recargo legal contemplado en el artículo 168 del Código del Trabajo, bonos y gratificaciones por el periodo que indica, cotizaciones previsionales por los meses de abril a junio de 1998 en base a la remuneración que señala, y a la restitución del descuento efectuado por el empleador por concepto de seguro de cesantía; todo con los reajustes e intereses contemplados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. Asimismo, se acogió la demanda de nulidad de despido, ordenando que la demandada deba solucionar las remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen desde la fecha del despido y la de su convalidación.

La demandada interpuso recurso de nulidad en contra de la referida decisión, fundado, en lo que interesa, en la causal contemplada en el artículo 477 en relación con los artículos 162 del Código del Trabajo y 13 y 52 de la Ley N° 19.728; y la Corte de Apelaciones de Santiago, por fallo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, lo acogió parcialmente, y en fallo de reemplazo, rechazó la demanda de nulidad de despido, manteniendo en lo demás la decisión de primera instancia.

En relación a esta última decisión, ambas partes dedujeron recursos de unificación de jurisprudencia, para que, en definitiva, se los acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que describen.

Se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

En cuanto al recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante



Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación en cuestión debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones recaídas en el asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho que el actor solicita que esta Corte unifique consiste en establecer la correcta interpretación y aplicación de la sanción de nulidad de despido, contemplada en los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, en aquellos casos en que un trabajador prestó servicios bajo la modalidad a honorarios, siendo declarada la existencia de una relación laboral entre las partes en la sentencia definitiva.

En síntesis, refiere que yerra la judicatura del fondo al negar lugar a la demanda de nulidad de despido, en circunstancias que se tuvo por acreditado la existencia de una relación laboral entre las partes y que, durante tres meses de dicho vínculo, en que se celebró un contrato a honorarios, la empleadora no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso quinto del referido artículo 162 del estatuto laboral, de modo que corresponde aplicar la sanción que dicho precepto contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta su convalidación, mediante el entero de las cotizaciones adeudadas, citando roles y transcribiendo parcialmente sentencias de tribunales superiores de justicia que contienen dicha interpretación, que a su juicio, resulta acertada y aplicable al caso sub lite.

Tercero: Que la sentencia recurrida, en lo que interesa, acogió parcialmente el recurso de nulidad que se dedujo por la demandada en contra de aquella que hizo lugar a la demanda de nulidad de despido, rechazándola, fundado, en lo que interesa, en la causal contemplada en el artículo 477 en relación con el artículo 162 ambos del Código del Trabajo, sobre la base de los siguientes presupuestos fácticos que se tuvieron por acreditados en la sentencia de base:



1.- La existencia de una relación laboral entre las partes desde el 1 de enero de 1997 al 25 de julio de 2019, fecha en la que el actor fue despedido por la causal de necesidades de la empresa

2.- El vínculo jurídico entre las partes se inició con la celebración de un contrato a plazo fijo en enero de 1997, el que terminó el 31 de marzo de 1998; posteriormente, se celebró un contrato a honorarios, entre los meses de abril a junio de 1998, y luego, el 1 de julio de 1998 se contrató al demandante por obra o faena, relación que se dio término el 31 de marzo de 2001; posteriormente, el 1 de abril de 2001 se celebró un nuevo contrato por obra o faena, que terminó por renuncia del trabajador, para comenzar, el 1 de julio de 2005 una relación laboral de naturaleza indefinida.

3.- El trabajador se vinculó ininterrumpidamente con la demandada desde el 1 de enero de 1997 al 25 de julio de 2019.

4.- Durante la vigencia del contrato a honorarios, entre los meses de abril a junio de 1998, no se pagaron las cotizaciones previsionales del actor en la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum ni en la Isapre Consalud.

5.- Al momento de suscribir el respectivo finiquito, la empleadora descontó de la indemnización por años de servicios, el aporte efectuado por el empleador por concepto de seguro de cesantía, ascendente a la suma de \$7.545. 217.

Sobre la base de dichos presupuestos fácticos, se acogió la demanda de declaración de existencia de una relación laboral ininterrumpida, cuya fecha de inicio fue el 1 de enero de 1997, señalando que, del mérito de la prueba rendida, es posible concluir una continuidad laboral que fue fraccionada instrumentalmente en sus inicios por la empresa demandada en diversos contratos precarios, mediando un contrato civil a honorarios entre dos contratos formales, con el fin de evitar los efectos del artículo 159 del Código del Trabajo, lo que demuestra la existencia de una relación laboral que se ha mantenido en el tiempo a pesar de la suscripción de finiquitos, los que dado el contexto en referencia, carecen de poder liberatorio, pues no dan cuenta del término efectivo de la relación laboral.

En lo que dice relación con la sanción de nulidad de despido, la sentencia impugnada, como se dijo, acogió el recurso de nulidad interpuesto por la demandada, y en fallo de reemplazo rechazó tal pretensión, concluyendo que *“... en el fallo en estudio, quedó firme que, entre los meses de abril a junio de 1998, las partes suscribieron un contrato a honorarios, en virtud del cual el empleador no estaba obligado a efectuar descuentos para fines previsionales, deber que recién*



se le impuso en el fallo recurrido. En consecuencia, no resulta aplicable la sanción dispuesta en el artículo 162 del Código del Trabajo, el cual tiene por objeto castigar a los empleadores que, habiendo descontado los dineros correspondientes a las obligaciones previsionales, los han mantenido en su poder sin enterarlos en las entidades pertinentes, lo que no aconteció en este caso”.

Cuarto: Que, tal como ha sido sostenido reiteradamente por esta Corte, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial, de conformidad a los referidos artículos 483 y 483-A del estatuto laboral, que existan distintas interpretaciones respecto de una materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, que denoten una divergencia doctrinal que debe ser resuelta y uniformada.

Quinto: Que para dar lugar, entonces, a la unificación de jurisprudencia, se requiere analizar si los hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, son claramente homologables con aquellos materia de la sentencia que se incorpora al recurso para su contraste.

Sexto: Que realizado el examen de la concurrencia de los presupuestos enunciados en la motivación precedente, tal exigencia no aparece cumplida en la especie, desde que los fallos que han servido de sustento al recurso extraordinario en análisis no cumplen con el requisito de presentar una concepción o planteamiento jurídico disímil, en una situación fáctica análoga, y que denote una divergencia doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

En efecto, la única sentencia que el recurrente analiza detalladamente en su libelo, cumpliendo con los requisitos contemplados en el artículo 483 y siguientes del estatuto laboral, en el sentido de exponer una tesis jurídica diversa a la impugnada, es la dictada por esta Corte conociendo de un recurso de unificación de jurisprudencia en los autos rol N° 8.318-2014, la que parte de presupuestos fácticos diversos al del presente juicio, pues se refiere a una demanda de declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones interpuesta por un trabajador en contra de su ex empleadora en que se tuvo por acreditado una relación laboral de menos de un año entre las partes, en que la sociedad demandada alegó la existencia de un vínculo civil a honorarios esporádico, sin que haya existido la celebración de contratos de trabajo anteriores y/o posteriores a dicho vínculo,



presupuestos de hecho que no permite realizar el juicio comparativo propio del examen de unificación de jurisprudencia.

Lo mismo ocurre con las demás sentencias de cotejo acompañadas, las que, como se dijo, además de no cumplir con la exigencia de realizar un análisis de sus materias de derecho y de la manera en que resultan homologables al fallo impugnado, de su examen se desprende que tampoco son asimilables en sus presupuestos de hecho, pues dos de ellas se refieren a vínculos jurídicos entre trabajadores y organismos públicos (un servicio público y una municipalidad) y las otras dos entre demandantes y empresas privadas, sin que haya existido la celebración de contratos de trabajos anteriores o posteriores que permitan razonar en torno a la existencia de una relación laboral ininterrumpida y en las que, en dicho contexto, no se hayan pagado las cotizaciones previsionales de un periodo acotado.

Séptimo: Que, de lo expuesto, queda de manifiesto que, respecto de la materia de derecho propuesta por el demandante, los fallos acompañados por la parte recurrente no cumplen con los presupuestos contemplados en la legislación laboral para su cotejo, al fallar sobre la base de situaciones fácticas distintas, lo que conduce a desestimar dicho intento unificador.

En cuanto al recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada

Octavo: Que la impugnante propone como materia para efectos de su unificación, acerca de sí es procedente o no la imputación del aporte del seguro de cesantía que realiza el empleador al pago de indemnizaciones legales, conforme el artículo 13 de la Ley 19.728, cuando la causal de despido invocada por necesidades de la empresa fue declarada injustificada. Señala que es erróneo lo decidido por la sentencia impugnada en cuanto estimó procedente descontar de la indemnización por años de servicio el monto aportado por el empleador a la cuenta individual de cesantía, opinión que contradice el criterio jurisprudencial sostenido en los fallos de tribunales superiores de justicia que indica, y que, a su juicio, contienen la tesis correcta, en cuanto a la improcedencia de descontar el seguro de cesantía cuando se declara injustificado el despido; y cuya copia acompaña para su contraste.

Solicita se acoja su recurso y acto continúo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicte un fallo de reemplazo en los términos señalados.



Noveno: Que la decisión impugnada, luego de dar por acreditado la falta de presupuestos materiales para la configuración de la causal de despido por necesidades de la empresa, dio lugar a la pretensión de la demandada en torno a la restitución del descuento efectuado por el empleador por concepto de seguro de cesantía, argumentando que, al tenor de lo dispuesto en los artículo 13 y 52 de la Ley N° 19.278 *“...se desprende que, para que el descuento opere, es necesario que el saldo que se registra en la cuenta individual del trabajador, por concepto de seguro de cesantía, se haya producido por el término de los servicios del trabajador a la causal de necesidades de la empresa”* agregando que *“...si el juez determina que no se han probado debidamente las necesidades de la empresa para despedir al trabajador y declara que el despido es injustificado -como ocurre en la especie- no puede tener lugar la imputación referida en el inciso segundo del artículo 13 precitado, ya que esa deducción está sujeta a la condición de haber operado efectivamente la causal de necesidades de la empresa”*. Finalmente, refirió que *“...por último, admitir la tesis del recurso significaría que la decisión jurisdiccional en cuanto declara injustificado o improcedente el despido carece de eficacia, lo que es un evidente contrasentido, ya que al no haber operado la causal invocada por el empleador para despedir al trabajador, los efectos que pudiera haber generado ese término de servicios deben retrotraerse a su estado anterior, razón por lo que es del todo procedente restituir el dinero que se ha descontado indebidamente al trabajador”*.

Décimo: Que las sentencias acompañadas para la comparación de la materia de derecho propuesta, dictadas por esta Corte en los autos roles N° 23.348-19, N° 26.030-2019 y N° 138.207-2020, expresan una tesis jurídica diversa sobre la materia de derecho, lo que conduce a emitir un pronunciamiento al respecto y proceder a uniformar la jurisprudencia en el sentido correcto.

Undécimo: Que, para los fines de asentar la recta exégesis en la materia, debe tenerse presente que esta Corte, de manera sostenida (desde el rol N° 27.867-17, siguiendo con los N° 23.348-2018, N° 4.503-19, N° 19.198-19, N° 16.086-19, N° 6.187-19, N° 12.179-19 y últimamente en los roles N° 134.204-20 y 32.967-2021, entre otros) ha establecido que una condición *sine qua non* para que opere el descuento materia de autos, es que el contrato de trabajo haya terminado efectivamente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, de manera que si la sentencia declara injustificado el despido priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N° 19.728, pues tanto la



indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía, constituyen un efecto que emana de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo.

En consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por la judicatura laboral, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728.

Duodécimo: Que, en estas condiciones, no yerra la sentencia impugnada al concluir que es improcedente descontar de la indemnización por años de servicio que corresponde al trabajador, el monto aportado por el empleador a la cuenta individual de cesantía cuando el despido es declarado injustificado, pues, como ya se dijo, tal descuento sólo procede cuando se configuran los presupuestos del artículo 161 del Código del Trabajo.

Decimotercero: Que sobre la premisa de lo antes razonado, no obstante la verificación de la disimilitud doctrinal, corresponde rechazar el recurso de unificación planteado por la demandada, por cuanto el fallo recurrido contiene la posición jurisprudencial adecuada, no siendo, por lo tanto, necesario uniformar criterio.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 474 y 483 a 483-C del Código del ramo, **se rechazan los recursos de unificación de jurisprudencia** interpuestos en relación con la sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

N° 60.729-2021.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., y las abogadas integrantes señoras Carolina Coppo D., y Leonor Etcheberry C. No firma la Ministra señora Gajardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, trece de octubre de dos mil veintidós.





XCFEXBCQFJT

En Santiago, a trece de octubre de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

